



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-010-2021-00202-01
Demandante:	Gustavo Alonso Muñoz Quiceno
Demandado:	AFP Protección S.A. y Colpensiones E.I.C.E.
Asunto:	Consulta de Sentencia
Procedencia:	Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín
M. Ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Ineficacia afiliación al RAIS

**Medellín, junio cinco (5) de dos mil veintitrés (2023)**

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a impartir el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones E.I.C.E., respecto de la sentencia proferida el 25 de abril de 2023 por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral promovido por Gustavo Alonso Muñoz Quiceno contra la AFP Protección S.A. y Colpensiones E.I.C.E., conocido con el Radicado 05001-31-05-010-2021-00202-01.

## **1.- ANTECEDENTES**

### **1.1.- DEMANDA**

El señor Gustavo Alonso Muñoz Quiceno convocó a juicio a las AFP Protección S.A. y Colpensiones E.I.C.E., pretendiendo se declare la nulidad y/o ineficacia de su afiliación al Régimen de Ahorro Individual; se declare que continúa válidamente afiliado al Régimen de Prima Media; y se condene en costas a las entidades demandadas.

Los supuestos fácticos que apoyan las pretensiones antes descritas se sintetizan en que el señor Gustavo Alonso Muñoz Quiceno nació el 23 de abril de 1963, que estuvo afiliado al Régimen de Prima Media entre el 29 de agosto de 1983 y el 30 de junio de 1994, y en el mismo cotizó 557 semanas; y que ha estado afiliado al Régimen de Ahorro Individual desde el 01 de junio de 1994, y en el mismo ha cotizado 1.319 semanas, acumulando un total de 1.876 semanas cotizadas.

Afirmó que el traslado de régimen pensional obedeció única y exclusivamente al error en que fue inducido por la pésima asesoría brindada por la AFP Protección S.A., quien no le informó los pormenores y el alcance del traslado; que siempre ha tenido la voluntad de permanecer afiliado al régimen público de pensiones; y que el fondo privado le proyectó que a los 62 años de edad se pensionaría con una mesada de \$2.626.101, mientras que en el Régimen de Prima Media habría causado una mesada de \$2.869.932 (doc.02, carp.01).

### **1.2.- CONTESTACIÓN**

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada judicial, la **AFP Protección S.A.** admitió que el señor Gustavo Alonso Muñoz Quiceno nació el 23 de abril de 1963, y actualmente acredita 1.976,29 semanas cotizadas ante el Sistema General de Pensiones.

Aseveró que la demandante recibió de sus asesores información amplia, adecuada, suficiente, clara, comprensible, precisa y detallada respecto de las características propias de cada régimen pensional, para que de manera libre e informada seleccionara el más conveniente, según sus condiciones personales, y que la actora tuvo la oportunidad de regresar al Régimen de Prima Media pero dejó vencer el término establecido para ello, ratificándose en su decisión de permanecer afiliada al Régimen de Ahorro Individual.

En oposición a las pretensiones excepcionó la inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir; buena fe; prescripción; aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones; inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración; inexistencia de la obligación de devolver las primas del seguro previsional; y la genérica o innominada (doc.10, carp.01).

Por su parte, **Colpensiones E.I.C.E.** admitió que el señor Gustavo Alonso Muñoz Quiceno nació el 23 de abril de 1963, estuvo afiliado al Régimen de Prima Media entre el 29 de agosto de 1983 y el 30 de junio de 1994, y que en el mismo cotizó 557 semanas válidas para pensión.

Adujo que el demandante se afilió al Régimen de Ahorro Individual de forma libre, voluntaria y espontánea; que su traslado de régimen pensional es completamente válido, y no adolece de vicios en el consentimiento; que ratificó su voluntad de afiliación al régimen privado con el transcurso incuestionado del tiempo; que le faltan diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; y que en caso de autorizarse el traslado, debe ordenarse la devolución de las cotizaciones, aportes voluntarios, rendimientos generados, y descuentos aplicados, debidamente indexados.

Consecuentemente, excepcionó la inexistencia de la obligación; inexistencia de la nulidad del traslado a Protección; inoponibilidad frente a Colpensiones como

tercero de buena fe; indebida aplicación del artículo 1604 del CC; desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera; equivalencia del ahorro o diferencias pensionales; devolución de aportes indexados; devolución de cuotas de administración indexadas; devolución de conceptos discriminados; buena fe; prescripción; indebida aplicación de las normas en materia de asesoría de traslado pensional; compensación; imposibilidad de condena en costas; y la innominada (doc.11, carp.01).

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo proferido el 25 de abril de 2023, declaró la ineficacia del cambio de régimen pensional del señor Gustavo Alonso Muñoz Quiceno y, en consecuencia, declaró que el demandante ha permanecido afiliado al Régimen de Prima Media, sin solución de continuidad; condenó a la AFP Protección S.A. a trasladar el saldo existente en la cuentas de ahorro individual del actor, con sus correspondientes rendimientos financieros, frutos e intereses y el bono pensional, si ya fue redimido, asimismo, y con indexación, lo destinado al fondo de garantía de pensión mínima, los gastos de administración y el valor de las primas del seguro previsional y reaseguros; condenó a Colpensiones E.I.C.E. a recibir los valores aludidos, y a incorporarlos como aportes pensionales en la historia laboral del pretensor, cotizaciones que habrán de tenerse como semanas válidamente aportadas para el futuro reconocimiento de las prestaciones que se llegaren a causar; declaró no probada la excepción de prescripción, y condenó en costas a las AFP Protección S.A., en favor del demandante (doc.18, carp.01).

### **1.4.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión, el vocero judicial del señor **Gustavo Alonso Muñoz Quiceno** solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia, reiterando los hechos y argumentos esbozados en el escrito de demanda, y exaltando que el fondo

privado no aporó ningún elemento acreditativo con el propósito de probar el cumplimiento a su deber de informar en debida forma a su prohijado sobre las consecuencias del traslado de Régimen Pensional en los términos adocotrados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (doc.03, carp.02).

Por su parte, la apoderada judicial de **Colpensiones E.I.C.E.** alegó procurando la revocatoria del fallo de primer grado, aduciendo que lo ordenado afecta el principio de estabilidad financiera del Sistema de Seguridad Social, por cuanto la afiliación del actor al Régimen de Ahorro Individual se presume válido; que su representada no incurrió en acción u omisión contraria a derecho al momento de surtirse el traslado de régimen pensional; y que al actor le faltan diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, razón por la cual el retorno al régimen de prima media solo sería válido en caso de que su firma se hubiere sido falsificada, o su empleador lo hubiere afiliado sin su consentimiento, o si fuere beneficiario del régimen de transición.

Subsidiariamente, solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia en cuanto ordenó el traslado del saldo de la cuenta de ahorro individual, sin ningún tipo de descuento, y con la indexación de los conceptos que no se capitalizaron (doc.04, carp.01).

## 2. CONSIDERACIONES

### 2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Procede la consulta en favor de **Colpensiones E.I.C.E.**, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante*”.

### 2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN LA PRIMERA INSTANCIA

Los siguientes supuestos fácticos no son objeto de controversia:

- Que el señor Gustavo Alonso Muñoz Quiceno nació el 23 de abril de 1963 (pág.14, doc.02, carp.01); se afilió al Instituto de Seguros Sociales el 29 de agosto de 1983 (págs.15-18, doc.02, carp.01; págs.53-56, doc.11, carp.01; págs.69-70, doc.10, carp.01); y se trasladó a la AFP Protección S.A. el 18 de mayo de 1994 (págs.71-72, 73, doc.10, carp.01).
- Que el 06 de febrero de 2020 diligenció el formulario de afiliación a Colpensiones E.I.C.E. (pág.39, doc.02, carp.01; pág.46, doc.11, carp.01), traslado de régimen pensional fue rechazado en la misma fecha, porque se encontraba a diez (10) años o menos del requisito de tiempo para pensionarse (pág.40, doc.02, carp.01)
- Que el 24 de febrero de 2020 la AFP Protección S.A. proyectó que a los 62 años de edad se pensionaría en el Régimen de Ahorro Individual con una mesada de \$2.626.104 (págs.35-36, doc.02, carp.01).
- Que para el 07 de enero de 2022 contaba con 1.976,29 semanas cotizadas (págs.35-53, doc.10, carp.01), y un saldo de \$337.518.081, de los que \$83.511.450 eran aportes, y \$254.006.631 eran rendimientos (págs.54-68, doc.10, carp.01).

### **2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER**

Debe determinar la Sala:

¿Si la sentencia proferida en el proceso de la referencia se encuentra ajustada a derecho, efecto para el que habrá que determinar si el traslado efectuado por el señor Gustavo Alonso Muñoz Quiceno desde el Régimen de Prima Media hacia el Régimen de Ahorro Individual, a través de la AFP Protección S.A., en la fecha 18 de mayo de 1994, adolece de ineficacia?

¿Si debe ordenarse a la AFP Protección S.A., además del traslado de las cotizaciones, y los rendimientos financieros, la devolución indexada de las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las primas del seguro previsional, como consecuencia de la declaratoria de ineficacia?

## **2.4.- TESIS DE LA SALA**

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, es ineficaz el acto jurídico de traslado por el incumplimiento del deber de información, y de forma consecuencial, debe ordenarse el traslado no solo de los aportes y los rendimientos financieros, sino también de todos los conceptos que afectaron el valor de la cotización obligatoria, debidamente indexados, y en tal sentido, lo procedente será CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.

## **2.5.- PREMISAS NORMATIVAS**

El modelo pensional adoptado en Colombia a través de la Ley 100 de 1993, permitió la concurrencia de dos regímenes pensionales, excluyentes, el Régimen de Prima Media, administrado por el extinto Instituto de Seguros Sociales y algunos Fondos y Cajas de Previsión del sector Público, y el Régimen de Ahorro Individual administrado por los Fondos Administradores de Pensiones, entidades financieras de carácter privado (artículo 12).

El Régimen de Prima Media está caracterizado en los artículos 31 y 32 de la ley 100 de 1993, como un régimen en el cual las prestaciones que obtienen los afiliados o sus beneficiarios están previamente definidas por el legislador, donde los aportes de todo los afiliados constituyen un fondo común de naturaleza pública, con el cual se financia las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia y en el cual el Estado es quien tiene a su cargo la garantía de las pensiones a que se hacen acreedores los afiliados en este régimen, que se concreta a través del subsidio estatal.

Por su parte, el Régimen de Ahorro Individual, tal como lo define el artículo 59 del estatuto general de pensiones, está fundamentado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, el reconocimiento de la pensión y el monto de la misma está determinado por el capital acumulado, que debe ser el necesario para financiar una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente para 1994 y reajustado anualmente según la variación porcentual de IPC. La solidaridad opera en relación con la garantía de la pensión mínima legal, que da derecho a que el Estado complete la parte que haga falta para financiar una pensión mínima de vejez.

En este contexto de dualidad, el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, establece la libertad de selección de régimen como característica del Sistema General de Pensiones de la siguiente manera “... *la selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte de la afiliada, quien para el efecto manifestara por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley*”.

A su vez, el artículo 271 ibídem establece que: “*El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.*”

El deber de brindar información completa, comprensible y veraz de las administradoras de Fondos de Pensiones, es consustancial a la actividad de estas



entidades de carácter financiero y así fue establecido desde la vigencia misma del Régimen de Ahorro Individual, por el artículo 97 del estatuto financiero vigente para la época, Decreto 663 de 1993, el artículo 4º del Decreto 656 de 1994 y los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994.

Posteriormente, el legislador ha regulado el contenido de la información que debe ser brindada a los potenciales afiliados, por parte de los Fondos de Pensiones; véase la ley 1328 de 2009, el Decreto reglamentario 2555 de 2010, la ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la Circular 016 de abril 16 de 2016 de la Superintendencia Financiera, dentro del cual se incluye las reglas de funcionamiento, ventajas y desventajas de ambos regímenes, el análisis de la situación particular de la afiliada, proyecciones financieras de la futura pensión y la obligatoriedad de la doble asesoría para eventos de traslado.

En esta misma dirección, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha consolidado una línea jurisprudencial reiterada y uniforme, en torno al deber permanente e ineludible de información que concierne a las administradoras pensionales, como condición de eficacia de la afiliación inicial o el traslado de régimen; según la cual la afiliación desinformada produce la ineficacia del acto; correspondiendo a las AFP la carga probatoria de demostrar que entregaron al afiliado la información objetiva sobre la actividad de cada uno de los regímenes pensionales, para obtener un verdadero consentimiento.

Dan cuenta del precedente en referencia, los siguientes pronunciamientos SL, Rad, 31989 del 08 de septiembre de 2008; SL Rad. 31314 del 08 de septiembre de 2008; SL, Rad 33083 del 22 de noviembre de 2011; SL31314 del 06 de diciembre de 2011, SL 19447 del 27 de septiembre de 2017; SL 17595 del 19 de octubre de 2017, SL 413 del 21 de febrero de 2018; SL4964 (54814) del 14 de noviembre de 2018; SL 4989 del 14 de noviembre de 2018, SL 1452 del 03 de abril de 2019; SL1421 del 10 de abril de 2019; SL1688 del 08 de mayo de 2019; SL 1689 del 08 de mayo de 2019; SL3464 del 14 de agosto de 2019; SL 4360 del 09 de octubre de 2019; SL4426 del 16 de octubre de 2019; SL1611 del 01 de julio de 2020; SL 2877

del 29 de julio de 2020; SL SL1442 del 21 de abril de 2021; SL3349 del 07 de julio de 2021; SL5252 del 24 de noviembre de 2021, SL1017 del 23 de marzo de 2022, SL1498 del 27 de abril de 2022, SL1637 del 11 de mayo de 2022 y más recientemente en las sentencias, SL113 del 31 de enero de 2023, SL178 del 07 de febrero de 2023, SL397 del 01 de marzo de 2023, entre muchas otras.

De acuerdo con la *ratio decidendi* de las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es indiscutible que, para resolver el problema jurídico atinente a la validez o eficacia de las afiliaciones al Régimen de Ahorro Individual, deben aplicarse las dos sub reglas principales establecidas por el máximo Tribunal de la jurisdiccional ordinaria laboral, esto es: i) el deber profesional, permanente e ineludible de información que tienen las administradoras de pensiones, y ii) la inversión de la carga de la prueba, que les traslada a las mismas la responsabilidad de acreditar que entregaron al afiliado la información necesaria para adoptar una decisión consciente.

## **2.6.- CASO CONCRETO**

En el caso concreto, se tiene por establecido que el señor Gustavo Alonso Muñoz Quiceno se trasladó del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, a través de la AFP Protección S.A., en la fecha 18 de mayo de 1994, según se extrae del certificado de afiliaciones SIAFP y del formulario de afiliación incorporados al plenario (págs.71-72, 73, doc.10, carp.01).

No obstante, los referidos documentos no dan cuenta de la información brindada al accionante previo a que se surtiera el acto jurídico del traslado, tal y como lo ha indicado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia *“Como en muchísimas ocasiones lo ha sostenido esta Corte, dicha carga no se supe con la firma del formulario o porque en el mismo se utilicen leyendas o afirmaciones tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otras similares. Esos formalismos, a lo sumo, acreditan un consentimiento sin vicios, pero no informado”* (sentencia SL3871 de 2021); y es por ello que del simple formulario de afiliación no puede inferirse la

voluntariedad o consentimiento informado para el traslado de régimen pensional, en los términos del artículo 11 del Decreto 692 de 1994.

En igual sentido, se advierte que, aunque en el cartulario reposa un formulario de “Reasesoría Pensional” con fecha del 24 de marzo de 2015, suscrito por el demandante, lo cierto es el mismo no da cuenta de la información brindada, ni de los cálculos efectuados para la fecha (pág.74, doc.10, carp.01); y en todo caso, cumple relieves que la asesoría brindada con posterioridad al acto jurídico del traslado de régimen pensional no convalidan la actuación viciada de ineficacia, conforme a lo adocinado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia al indicar que “... este servicio no tiene la aptitud de subsanar el incumplimiento de la obligación de información en que incurrió la AFP al momento del traslado, por dos razones: (...) porque la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información” (CSJ SL1688 -2019; SL-2914-2020; SL5280-2021).

Además, del interrogatorio practicado al demandante no se deriva prueba de confesión, en tanto que el mismo indicó que en el año 1994 cambió de trabajo, y su nuevo empleador lo cambió de régimen pensional afiliándolo a Protección; que en ese momento no recibió asesoría por parte de ningún promotor del fondo privado; que la persona encargada de las afiliaciones en la empresa le entregó el formulario de afiliación ya diligenciado, pendiente únicamente de la suscripción; que recibió copia del formulario de afiliación; que posteriormente no buscó a Protección para que le brindara información; que desea retornar a Colpensiones porque es mucho más rentable para una futura pensión; que no ha radicado queja o reclamo ante Protección por la administración de sus aportes; y que no ha

recibido ninguna asesoría por parte de ningún promotor de Colpensiones (desde el minuto 00:53:40, doc.19, carp.01).

Corolario de lo anterior, es claro para la Sala que, si bien el gestor del proceso se trasladó de forma libre y voluntaria, ello lo hizo sin haber recibido la información clara, completa y comprensible al respecto, sin conocer las características ni el funcionamiento del Régimen de Ahorro Individual, o las consecuencias del traslado, ni las desventajas de dicho régimen pensional, así como tampoco las diferencias con el Régimen de Prima Media.

Aunado a lo que se viene diciendo, esta Colegiatura advierte que no existe medio de convicción alguno, a partir del cual pueda establecerse que la AFP Protección S.A. cumpliera con el deber profesional de información, para garantizar la decisión libre, voluntaria e informada de la afiliada, sobre las implicaciones del traslado, tal y como lo reclama el pretensor.

En este escenario probatorio, esto es, ante la ausencia de medios demostrativos que den cuenta de la información que la AFP Protección S.A. le brindo al actor al momento de efectuarse el traslado de régimen pensional, no es posible una decisión distinta a la declaratoria de ineficacia del acto jurídico de traslado de régimen pensional.

### **De los efectos de la ineficacia**

La declaratoria de ineficacia supone que el acto no produce efectos jurídicos, como si no hubiese existido, por lo tanto, no pueden excluirse del traslado, las comisiones de administración, los seguros previsionales, ni los aportes al fondo de garantía mínima, teniendo en cuenta que estos afectaron el valor de la cotización del demandante y al ser declarada la ineficacia, los pagos y deducciones, quedan sin causa jurídica, debiéndose trasladar el aporte completo al Régimen de Prima Media, para garantizar el financiamiento de la futura pensión del actor.

Y es que además, no puede afectarse el fondo común de naturaleza pública del Régimen de Prima Media, con la disminución de la cotización en favor de la administradora del fondo privado accionada, teniendo en cuenta, que fue quien dio lugar a la sanción del acto jurídico, en virtud del incumplimiento al deber de información y siendo ésta, la entidad en la cual se encuentra vigente la afiliación del actor, por lo tanto, debe asumirlo aun de su propio patrimonio, conforme al artículo 963 del Código Civil.

Respecto a los conceptos que deben ser trasladados como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual, se pronunció recientemente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL2877-2020, indicando:

*“Ahora, el restablecimiento debe ser pleno o completo, si el tipo de obligación contraída así lo permite y, por tanto, dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto, deben definirse tales restituciones mutuas, ejercicio que, en su labor de dispensar justicia, debe ser analizada detalladamente por el juez en cada caso en particular”*

*De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.*

*En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el Régimen de Prima Media. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”*

Similar postura se sostuvo en la sentencia SL 3034 de 2021:

*“Resultan suficientes las consideraciones vertidas en sede extraordinaria para denegar prosperidad a la alzada y al surtir el grado jurisdiccional de consulta, se advierte que el restablecimiento pleno o completo, como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado*

*de régimen pensional, en los términos de la sentencia CSJ SL2877-2020, requiere especificar y detallar algunas de las condenas impartidas por el a quo, razón por la cual se procederá a CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, el 03 de diciembre de 2018, precisando y adicionando el ordinal segundo en el sentido de que Old Mutual SA, además, deberá trasladar a Colpensiones, lo recaudado por comisiones y gastos de administración debidamente indexados durante todo el tiempo que el accionante permaneció en el RAIS, así como los valores utilizados en seguros previsionales y los emolumentos destinados a constituir el fondo de garantía de pensión mínima”.*

De manera particular, se relieves que los rendimientos financieros generados, mientras estuvo activa la afiliación, son de propiedad del demandante y no de los Fondos, aunado a ello, tampoco resultan ajenos al régimen administrado por Colpensiones, conforme al literal b) del artículo 32 de la Ley 100 de 1993, dado que el fondo común también se integra por rendimientos de las cotizaciones de los afiliados y por lo tanto no pueden compensar los gastos administrativos.

Los aportes al fondo de garantía mínima, cuya aplicación es exclusiva del Régimen de Ahorro Individual, deben ser trasladados conforme al artículo 7 del decreto 3995 del 2008 y las sentencias SU 062 de 2010 y SU 130 de 2013, destacando que la diferencia entre el ahorro y la cotización cuando se trata de traslado permitido legalmente, debe ser asumida por la afiliada, no así cuando, como en el sub lite, se trata de la sanción al acto jurídico por incumplimiento de la AFP al deber de información.

En cuanto a las primas de los seguros previsionales, si bien los mismos ampararon los riesgos de invalidez y muerte en vigencia de la afiliación del pretensor, también generaron la disminución de la cotización y al quedar sin efecto la afiliación, también deben ser trasladados, siendo claro que, al no estar estos conceptos dentro de la cuenta de ahorro individual del demandante, deben ser trasladados con cargo a los propios recursos de la AFP demandada y por lo tanto no afectan los pagos realizados a la respectiva aseguradora.

Adicionalmente, cumple memorar que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en las sentencias SL 5236, SL 5285, SL5337, SL5525, SL5543

de 2021 y SL950 de 2022, ha adoctrinado que la indexación de los descuentos objeto de devolución, como lo son las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia que debe reintegrar la AFP, es un efecto inherente a la declaratoria de ineficacia, con el cual se busca no afectar la estabilidad financiera de Colpensiones E.I.C.E.

Así las cosas, la sentencia de primera instancia será confirmada en su integridad. Sin costas en esta instancia por haberse revisado el fallo de primera instancia bajo el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones E.I.C.E.

### **3.- DECISIÓN**

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

#### **FALLA:**

**1.-** Se **CONFIRMA** la sentencia proferida el 25 de abril de 2023 por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por Gustavo Alonso Muñoz Quiceno contra las AFP Protección S.A. y Colpensiones E.I.C.E.


**2.-** Sin costas en esta instancia.


**3.-** Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.


El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3º literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la

Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,

  
**SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE**

  
**CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**

  
**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**